


Claves de Latinoamérica



CHILE

Nº 58

Informe de coyuntura



Febrero, 2016



INTRODUCCIÓN

El trimestre con el que culminó el año político 2015 y que ha extendido sus principales vectores hacia un previsiblemente agitado 2016, podría caracterizarse como de “estancamiento dinámico” en el que la tracción de las fuerzas reformistas y conservadoras en sus diversas corrientes e intensidades, ha prácticamente inmovilizado un escenario revuelto, tanto por los costosos cambios sociales, políticos y económicos propuestos por el Gobierno, como por la crisis económica internacional -y sus efectos en Chile- que ha limitado el ritmo y profundidad de las reformas.

Al mismo tiempo, ha sido un período paradójico respecto a la conducción de la Presidenta Michelle Bachelet, quien es calificada por unos como de “ausente” y “sin liderazgo”, y por otros, como de “objetivos claros”, “realista, pero sin renuncias” y hasta de “obstinada” respecto de la consecución de los objetivos y consecuencias de su Programa para el crecimiento, en un marco político en el que se discute tanto la necesidad de materializar los cambios a través del mayor consenso y participación ciudadana posible, como de los límites que impone una economía ralentizada y más pobre que en años anteriores.

En efecto, en la contradicción reformas-financiación, tanto la oposición de derecha y centro derecha presente en las dos coaliciones principales, como buena parte del empresariado, exigen no solo una moderación del ritmo de materialización de los cambios, sino que además, desplazar el foco hacia políticas pro crecimiento y pro empleo, manteniendo los espacios de libertades normativas, en tanto que sectores de centro izquierda e izquierda, así como las principales organizaciones de trabajadores, presionan por avanzar más rápida y profundamente en las reformas y leyes que aseguren el corazón de las políticas programáticas de Bachelet: disminución de las brechas de desigualdad, justicia social y un Estado más presente en la actividad económica, la fiscalización y control de los poderes económicos y políticos.

LA PARADOJA CHILENA

El cierre de 2015 e inicio de 2016 muestra continuidad de las tendencias que han guiado la actividad político institucional, la que transcurre marcada por el sacudido proceso de reformas económicas, políticas y sociales, que se ha combinado con una desmedida polémica pública de dirigentes partidistas, los primeros efectos de la ralentización económica mundial y la amplia difusión de las investigaciones del Ministerio



Público y el Poder Judicial frente a denuncias de escándalos de financiación ilegal de la política, así como sonados juicios sobre abusos con el consumidor y confabulaciones empresariales en diversas áreas productivas.

El último de éstos afectó a la muy tradicional CMPC (papelera perteneciente al poderoso e influyente grupo Matte y que tuvo un papel relevante en la caída del ex Presidente socialista S. Allende), obligando a su controlador, Eliodoro Matte, no solo a abandonar el liderazgo del CEP, sino a pedir excusas públicas y estudiar, de la mano del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), reparaciones económicas a los consumidores, una vez que la autoridad detectara su complicidad con otras firmas competidoras para estabilizar los precios del papel *tissue*, no solo en Chile, sino en otros países del área donde la compañía tiene presencia y donde también ha sido objeto de investigaciones judiciales.

Este conjunto de informaciones sobre corrupción política, en la empresa, la iglesia, las FF.AA., el fútbol, el Congreso y hasta el propio Ejecutivo (Caval), generó una reacción en cadena que ha concluido con el antes descrito estado de ánimo revelado por todas las encuestas y que implica un alto grado de rechazo y pesimismo sobre las instituciones y sus elites.

Junto a este escándalo, surgió otro que afectó la imagen del deporte más popular del país, el fútbol, después de que una investigación internacional involucrara al presidente de la Asociación Nacional respectiva (ANFP), Sergio Jadue, en acusaciones de corrupción que afectaron también a otros dirigentes internacionales de la Federación de ese deporte. Jadue, al ser requerido por la justicia norteamericana, acordó colaborar con aquella y fue llevado a EE.UU., donde está siendo juzgado.

A mayor abundamiento, por esos mismos días, una investigación que realizaba sigilosamente el alto mando del Ejército desde hacía meses, en contra de un grupo de oficiales y suboficiales de intendencia, irrumpió en los medios de comunicación como una estafa de proporciones que, utilizando facturas falsas, malversó recursos de la Ley Reservada del Cobre que financia la compra de armas y material de las FF.AA., mediante el 10% de las ventas de cobre. Hecho que terminó imponiendo la percepción ciudadana de que el fenómeno de la corruptela alcanzaba "a todas las instituciones de poder".

Este conjunto de informaciones sobre corrupción política, en la empresa, la iglesia, las FF.AA., el fútbol, el Congreso y hasta el propio Ejecutivo (Caval), generó una reacción en cadena que ha concluido con el antes descrito estado de ánimo revelado por todas las encuestas y que



implica un alto grado de rechazo y pesimismo sobre las instituciones y sus elites. Paradójicamente, colisiona con una mayoría ciudadana (sobre 70%) que se manifiesta "feliz" o "muy feliz" en sus entornos privados, familiar y de trabajo, satisfechos con sus vidas, y que expresan su acuerdo con el emprendimiento, la recompensa por méritos, rechazo al paternalismo estatal, la libertad económica, educacional y de acceso y elección de bienes y servicios ofrecidos por particulares, revelando una obvia valoración de los fundamentos de la democracia y la economía de mercado.

Diversos analistas sociales han atribuido esta paradoja al hecho que si bien los chilenos son críticos de las profundas desigualdades que ha generado la competencia de libre mercado, que se asume injusta y desleal, y que, por tanto, son mayoritariamente partidarios de disminuir esas brechas, abriendo oportunidades a través de educación gratuita, servicios de salud accesibles y más eficientes y mejores jubilaciones, los casi 40 años de aplicación del modelo han provocado un cambio cultural que amenaza con alcanzar un punto de inflexión en el que instituciones y elites tradicionales se verán desafiadas por ciudadanos más informados y empoderados, fenómeno que se ha tornado universal, pero que no parece apuntar necesariamente a cambios estructurales del sistema, sino más bien a su ajuste, para conseguir mayor justicia e igualdad en un ambiente de libertad política y económica.

El cierre de 2015 e inicio de 2016 muestra continuidad de las tendencias que han guiado la actividad político institucional, la que transcurre marcada por el sacudido proceso de reformas económicas, políticas y sociales

Así, por ejemplo, si bien el titular de la educación gratuita, universal y de calidad planteado por el movimiento estudiantil y que fuera adoptado por el Programa de Bachelet, tuvo gran aceptación inicial, sus primeros tropiezos llegaron en momentos en que el Ejecutivo apuntó a una suerte de estatificación de los colegios particulares que reciben subvención del Fisco, provocando una reacción masiva de padres y apoderados con alumnos en dichos centros y que habían llegado a ellos desde la educación pública municipalizada, mediante un copago familiar realizado con esfuerzo, pero que les permitía "escapar" de la baja calidad de la educación pública, aunque, principalmente, de su desordenado ambiente que, desde la perspectiva de esas capas medias emergentes, afectan el desarrollo de sus hijos al estar mezclados diariamente con estudiantes más pobres, menos interesados en los estudios y agresivos.

Una situación similar se produjo con la propuesta del Gobierno para la educación superior, una vez que, tras su regreso a Chile, la Presidenta se



manifestara públicamente a favor de una gratuidad solo para los estudiantes terciarios de los primeros siete deciles más vulnerables. Sin embargo, las presiones estudiantiles, gremiales y de la izquierda más dura, la impulsaron a avanzar hacia un proyecto de gratuidad universal y virtual estatificación del sistema, al trasladar los subsidios a la demanda vigente, hacia la oferta exigida por las Universidades estatales afectadas por la competencia de las privadas.

La discusión sobre la ley larga y los diversos proyectos en que la reforma a la educación superior ha sido dividida, en tanto, ya no podrán ser evacuados antes del receso veraniego de febrero y continuará en marzo de este año con idénticos problemas. Desde luego, ya algunos estiman que en dicho plazo (2016) no habrá acuerdos, pues el escenario se ha radicalizado, llevando la polémica a los principios: mientras los sectores de izquierda han planteado un cambio total del paradigma que condujo el sistema hasta ahora ("*educación de mercado*") por otro de "*educación como derecho social*", aunque sin reparar demasiado en su financiación de largo plazo, sectores de centro y derecha apuntan a la pérdida de libertades de educación y elección que el proyecto implica.

LA CRISIS ECONÓMICA

Como si las dificultades producidas por las reformas no hubieran sido suficientes, hacia finales del 2015 la crisis internacional detonada por la ralentización de China, la recesión en Europa y de los principales países emergentes socios del país, provocó el derrumbe de las exportaciones y de los precios del cobre, metal que representa alrededor del 6% de los ingresos fiscales, poniendo en aprietos una caja ya estresada por los recursos permanentes comprometidos en las reformas a la educación y por aquellos que deberían ser provisionados para las mejoras en salud y previsión. Al mismo tiempo, las expectativas de recaudación tributaria 2015 se veían frustradas por el bajo crecimiento económico 2015 (2,1%), mientras las perspectivas para 2016 han seguido ajustándose a la baja, los cálculos de economistas apuntan a un déficit fiscal de unos US\$ 18 mil millones al término del mandato de Bachelet y los envíos de la primera quincena de enero llegan a su nivel más bajo desde 2009.

En dicho marco, la mandataria, junto con el nuevo gabinete, ha insistido en su Programa e instó a ministros y partidos aliados a no bajar la guardia en el camino de las reformas, aunque con "*realismo*" -dadas las nuevas condiciones económicas- pero "*sin renuncias*", advirtiendo que, a pesar de las dificultades, el Gobierno está decidido a seguir avanzando en la materialización de sus promesas electorales.



Pero como el llamado de la Presidenta se producía en paralelo con el agravamiento de los cargos que el Ministerio Público hacía contra su familia en el Caso Caval, los hechos terminaron restándole fuerza “moral” a su discurso, aun cuando, públicamente declarara, en respuesta indirecta a las interpretaciones de “moderación” que circulaban tras la llegada de los dos nuevos ministros, que “algunos parecen haber escuchado solo la palabra realismo y no sin renuncias”.

Así, la moderación del ritmo de las reformas a que obligaban las nuevas condiciones económicas, como los anuncios de La Moneda en el sentido de postergar algunas, dividió a sus aliados entre quienes, a la izquierda, instaron a seguir impulsando los cambios “sin renuncias”, y quienes, desde el centro, centro izquierda y la derecha, llamaban a detener el “frenesí legislativo” para que el Congreso discutiera los cambios con mayor profundidad, evitando la aprobación de leyes que, como la tributaria o educacional, por apresuramiento, se han debido corregir o reprojectar, poniendo, al mismo tiempo, mayor énfasis en políticas pro crecimiento que aminoren los efectos de la crisis externa.

Las posturas se expresaron no solo en la discusión de la reforma educacional, carrera docente, o educación superior, sino, también, en la postergación de la discusión de los textos de reformas analizadas y propuestas por expertos de sendas Comisiones formadas por la Presidenta para estudiar mejoras al sistema de salud (Isapres) y previsional (AFP), proyectos que han sido “puestos en la nevera”, por ahora, dado que exigen una financiación fiscal permanente que no se vislumbra en las actuales condiciones.

En dicho marco, la mandataria, junto con el nuevo gabinete, ha insistido en su Programa e instó a ministros y partidos aliados a no bajar la guardia en el camino de las reformas, aunque con “realismo”

Un destino similar ha tenido la nueva constitución y la definición de una metodología de redacción y aprobación de la nueva carta, cuyo proceso de socialización y participación ciudadana se inició a finales del 2015, con una campaña de educación cívica a través de medios y las redes sociales y que continuará en febrero, mientras en marzo seguirá con los primeros cabildos ciudadanos que serán guiados por más de 200 monitores pagados en las 345 comunas del país. Miembros de la llamada bancada por la Asamblea Constituyente, conformada especialmente por parlamentarios de izquierda y centro izquierda, han señalado que el proceso de reforma constitucional se encuentra “al debe”, merced a un Gobierno que “se ha quedado corto” en este sustantivo cambio.



Con una economía estresada por el bajo crecimiento, con grandes empresas desprestigiadas y una fuerte caída de la confianza e imagen ciudadana respecto de las grandes fortunas y el resto de las elites, una estabilización de la recaudación tributaria, disminución de las exportaciones, en especial las mineras, así como de sus precios, unido a una depreciación del peso que ha "importado" inflación, llevando al Banco Central a subir la tasa de interés, reduciendo así el ritmo de entrega de créditos de consumo y a las empresas, las expectativas de avanzar en reformas estructurales que requieren enormes sumas de recursos fiscales, finalmente ha reducido su ritmo, e incluso el lenguaje de anteriores partidarios de "pasar la retroexcavadora" al modelo neoliberal.

Hace solo algunos días, el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, volvió a reducir las perspectivas de crecimiento del PIB para el 2016, llevándolo a 2%, cifra que fue ratificada posteriormente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que volvió a rebajar el crecimiento latinoamericano y el de Chile a similares niveles. Asimismo, instó a moderar el lenguaje, pues toda desmesura solo contribuía a afectar aún más la economía.

Con un Producto de unos US\$ 270 mil millones, un bajo crecimiento como el estimado por Valdés y el FMI, implica mayores ingresos por unos US\$ 5.400 millones, en tanto que sólo la reforma educacional global significa costos anuales permanentes superiores a los US\$ 6 mil millones.

LA CRISIS POLÍTICA

Junto al grupo de reformas en proceso, pendientes o postergadas, el Gobierno ha debido lidiar y coordinar una clase política que vive su propia crisis, tras las denuncias e investigaciones judiciales por financiación ilegal de las campañas, cuyas primeras víctimas procesales son destacados dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), como Jovino Novoa, fundador de la colectividad y quien fue condenado a tres años de presidio remitido; y el senador Jaime Orpis, acusado de cohecho.

Sin embargo, el tsunami judicial amenaza con envolver a otros personeros de centro e izquierda connotados, como los ex candidatos presidenciales Andrés Velasco (involucrado en el Caso Penta) y Marco Enríquez-Ominami, relacionado con dineros entregados por SQM; los senadores PPD, Guido Girardi y del PS, Fulvio Rossi; el ex senador PS y ex ministro Carlos Ominami, además del ex candidato a senador UDI, Laurence Golborne; el ex diputado UDI, Pablo Zalaquett; los senadores UDI en ejercicio, Ena von Baer e Iván Moreira, entre otros.



Para enfrentar la crisis de legitimidad institucional que se comenzó a expresar desde mediados del 2015 a raíz de dichos escándalos, el Ejecutivo respondió con la conformación del "Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción" el que, encabezado por el economista, Eduardo Engel, formuló una amplia lista de proposiciones al Gobierno, que fueron enviadas después al Congreso en la forma de distintos proyectos destinados a reorganizar la vida interna de los partidos, estimular la competencia y el acceso de nuevos grupos a la política, mejorar la fiscalización de los recursos públicos que se aprueben para financiar a estas colectividades, evitando así la influencia indebida de las empresas en la actividad y, en definitiva, hacer más transparente la gestión de los partidos, sus dirigencias y militantes.

Sin embargo, como era previsible, la polémica al interior del Congreso respecto de las propuestas del Consejo fue ardua y conflictiva, en la medida que los incumbentes realizaron durante la discusión una serie de maniobras destinadas a limitar las duras exigencias que la Comisión Engel había propuesto. Entre otras, los partidos tradicionales buscaron aumentar la cantidad de firmas mediante las cuales se puede inscribir un partido político, desde el 0,25% de quienes sufragaron en la última elección en la respectiva región o conjunto de regiones que propuso el Ejecutivo, a un más exigente 0,5%. Asimismo, se intentó reducir las penas -que incluyen cárcel- para aquellos candidatos que trasgredieran las normas de financiación electoral y sus límites.

Junto al grupo de reformas en proceso, pendientes o postergadas, el Gobierno ha debido lidiar y coordinar una clase política que vive su propia crisis, tras las denuncias e investigaciones judiciales por financiación ilegal de las campañas

Así y todo, los proyectos han ido siendo evacuados con alta fidelidad a los textos propuestos, aunque especialmente gracias a la presión intra y extra parlamento realizada por los noveles diputados de la bancada estudiantil y de las colectividades en formación, en la derecha e izquierda, tales como Amplitud, dirigida por la senadora ex RN, Lily Pérez; Evópoli, del diputado Felipe Kast; Izquierda Autónoma, del diputado Gabriel Boric; Revolución Democrática, del diputado Giorgio Jackson; Ciudadanos, del ex ministro Andrés Velasco y otros.



En los hechos, Chile cuenta en la actualidad con un total de 14 partidos constituidos y 18 en formación, cubriendo prácticamente todo espectro ideológico, aunque se espera que el número aumente en los próximos meses, merced a la nueva legislación de partidos y electoral.

LAS ELECCIONES

En este marco de revolución copernicana, los partidos tradicionales, recién constituidos, o en formación han debido abordar las próximas elecciones municipales de noviembre y las parlamentarias y presidenciales que se efectuarán hacia fines de 2017.

Presionados por los trabajos de reinscripción de militantes -los constituidos- o de recolección de firmas -los en formación- en un marco de amplio repudio a la política partidista, así como por las nuevas condiciones de la competencia electoral, con menores recursos que los que acostumbraban a gastar los aspirantes más pudientes, prohibiciones en los modos de realizar propaganda, y varios de ellos en proceso de elecciones internas de direcciones nacionales, en las que se conforman facciones de poder, los partidos han conseguido, al menos, estabilizar las dos principales coaliciones, así como las alianzas con las que presentarán sus listas a los comicios municipales.

En efecto, por parte de Chile Vamos, el nuevo nombre con que se ha reorganizado la derecha tras su rotunda derrota de 2013, ya consiguió la conformación de un comité directivo en el que están representados las cuatro colectividades que lo conforman: RN, UDI, Evópoli y el Partido Regionalista Independiente (PRI). Asimismo, ya han decidido los sub-pactos con los que competirán por las 2.224 concejalías municipales: una lista RN, otra UDI y una tercera, PRI -Evópoli, todas colectividades que presentarán, en conjunto, unos 6.600 candidatos.

Por la Nueva Mayoría, los sub-pactos se conformaron en una lista de la DC y el PS, mientras que hacia la izquierda, la lista está compuesta por aspirantes PPD, PC, PRSD, IC y MAS, todos los cuales presentarán alrededor de 8.000 candidatos. La suma de estos aspirantes (unos 14.600) supera largamente a los que se presentaron a las municipales de 2012 (9.898)

En el caso de la elección de alcalde, el acuerdo de ambos conglomerados es concurrir con un solo candidato por alianza, pues se trata de una competencia bajo el modelo de elección proporcional mayoritaria, razón por la que la división de fuerzas resta posibilidades a dos candidatos eventuales, pudiendo ser superados por un tercero de la alianza que haya concentrado los votos de su coalición.



En las negociaciones de la derecha para definir el candidato a alcalde se acordó realizar alrededor de 35 primarias en aquellas de las 345 comunas más disputadas. Según ha trascendido, el PRI solicitó unas 25 alcaldías, cifra similar o un poco menor Evopoli. Las cerca de 300 restantes serán para la UDI y RN en partes iguales. En la actualidad, Chile Vamos cuenta con 125 ediles en el país y la meta es llegar a unos 150 o poco más. En las elecciones de 2012, los candidatos a alcalde fueron en total 1.159, de los cuales unos 700 correspondieron a las dos grandes coaliciones tradicionales y el resto a partidos menores y candidatos independientes. Una cifra similar o levemente superior de candidatos se espera para los próximos comicios.

Las elecciones de concejales tienen importancia política relativa, en la medida que, si bien no son relevantes en la conducción de las comunas, pues el poder del alcalde es una reproducción del presidencialismo a nivel nacional, sus resultados son claves para medir las fuerzas de cada uno de los partidos o sub-pactos, transformándose en un potente insumo en materia de negociaciones para las elecciones parlamentarias y presidencial.

Respecto de las elecciones parlamentaria y presidencial las conversaciones en ambas coaliciones están en punto inicial y se estima que las decisiones se adoptarán con arreglo a los resultados de las municipales. En efecto, el hecho que estos comicios al Congreso se realizarán por primera vez bajo la nueva legislación electoral proporcional mayoritaria, al tiempo que en distritos y circunscripciones redimensionadas y más grandes, pone un grado de incertidumbre que ha atrasado las habituales negociaciones parlamentarias.

Sin embargo, a nivel presidencial ya han surgido diversos nombres de pre candidatos que se asumen ya trabajando para participar en las primarias partidarias y de cada coalición y así ser nominados oficialmente como los candidatos de sus respectivas alianzas.

Por de pronto, en Chile Vamos suenan como aspirantes el ex Presidente Sebastián Piñera, los senadores RN, Manuel José Ossandón, Alberto Espina y Francisco Chahuán; los diputados, José Antonio y Felipe Kast, por la UDI y Evópoli, respectivamente.

En este marco de revolución copernicana, los partidos tradicionales, recién constituidos, o en formación han debido abordar las próximas elecciones municipales de noviembre y las parlamentarias y presidenciales que se efectuarán hacia fines de 2017.



En la Nueva Mayoría, en tanto, se ha mencionado al ex Presidente Ricardo Lagos, por el PS y recientemente fue aclamado en el consejo nacional del PPD; a la senadora Isabel Allende, también por el PS; al diputado Jorge Tuma, y los senadores Guido Girardi y Ricardo Lagos Weber, por el PPD; el senador Ignacio Walker, por la DC, sin descartarse que el PC, IC y el MAS, presenten su propio precandidato a las primarias, o negocien su eventual apoyo al dirigente del PRO, Marco Enríquez-Ominami, quien ha estado negociando una alianza con el Partido Humanista para conformar su propia coalición municipal y parlamentaria. Se estima que, si logra salir indemne de las investigaciones por financiación ilegal en curso, presentará su candidatura por fuera de la Nueva Mayoría, debido al férreo veto que la DC ha puesto para que participe en una primaria del oficialismo.

Amplitud, Ciudadanos y Red Liberal han conformado su propia coalición de "centro" liberal, llamada Sentido Futuro, en la que los pre candidatos presidenciales en sus propias primarias serían el ex Ministro de Hacienda de Bachelet, Andrés Velasco y/o la senadora Lily Pérez.

Santiago de Chile, Febrero 2016